

Si las cuentas públicas del año pasado tenían un “acentuado carácter social”, las de 2018 han ascendido en el escalafón para ser calificadas como “los Presupuestos más sociales de la historia”. Lo ha dicho Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos y, por supuesto, el ministro de Hacienda. Pero lo que ninguno de los dos ha precisado es que el gasto total en relación con el Producto Inte-

rior Bruto se ha reducido a su nivel más bajo desde 2007, y retrocede hasta el 40,5%, lo que supone además alejarse aún más de la media europea que, según Eurostat, está en torno al 46%. “La política del PP no son los recortes, sino la moderación del gasto”, ha señalado Montoro para reconocer que el gasto aumenta “pero no tanto como la actividad económica”.

El gasto en estas dos partidas se reduce por tercer año consecutivo igual que el gasto en protección social, a la baja en los últimos cinco años

Los PGE ‘más sociales’ recortan en Sanidad y Educación

■ Ana Sánchez Arjona

Ya el año pasado, el ministro de Hacienda, **Cristóbal Montoro**, defendía que el gasto social crecía y que las cuentas públicas tenían un “acentuado carácter social”. Las de este año han ascendido en el escalafón para ser calificadas como “los Presupuestos más sociales de la historia”. No solo lo ha dicho el responsable de Hacienda, sino también el secretario de Estado de Presupuestos, **Alberto Nadal**, al que se unía también el portavoz del Gobierno, **Íñigo Méndez de Vigo**, que destacó el apoyo a pensionistas y funcionarios. Pero lo que ninguno de ellos ha precisado es que el gasto total en relación con el Producto Interior Bruto se ha reducido a su nivel más bajo desde 2007, y que el Ejecutivo lleva ya tres años recortando el desembolso en Sanidad y Educación y cinco en Protección Social.

Según los datos incluidos en los Presupuestos, el gasto público total previsto para 2018 retrocede hasta el 40,5%, lo que supone además alejarse aún más de la media europea. Eurostat, que utiliza la medición en relación al PIB para conocer cuál es realmente el nivel de gasto público y hacerlo además de modo comparable, estima que la media en Europa está en torno al 46% “La política del PP no son los recortes, sino la moderación del gasto”, ha señalado Montoro. «El gasto aumenta pero no tanto como la actividad económica», ha explicado para justificar que las medidas como la subida de las pensiones más bajas o la rebaja del IRPF no pondrá en riesgo el cumplimiento del déficit. 6%.



Cristóbal Montoro entrega el Proyecto de PGE 2018 a Ana Pastor.

EUROPA PRESS

GASTO TOTAL/PIB (%)*

1996	2000	2004	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018p
43,0	39,2	38,7	39,0	41,2	45,8	45,6	45,3	44,3	45,1	44,6	43,7	41,9	41,0	40,5

Fuente: PGE 2018

Esta caída del gasto público supone que ya son cinco los años consecutivos de rebajas, un quinquenio en el que también ha menguando el esfuerzo en Protección Social. Esta última situación no deja de ser paradójica porque el gasto en pensiones, que está incluido en esta partida, está creciendo con fuerza. Pero el incremento económico, unido a

“La caída del gasto público supone que ya son cinco los años consecutivos de rebajas, un quinquenio en el que también ha menguando el esfuerzo en protección social”

los importantes ahorros en el gasto por desempleo, hacen que el nivel de gasto en relación al PIB realmente esté cayendo. Para 2018, y según las estimaciones que el Gobierno incluyó en el **Plan Presupuestario**, la cifra será del 16,2%, lejos del 18% que rozó en 2013 o del 17% en el que estaba en 2015.

Por su parte, las partidas destina-

das a **Sanidad y Educación** se contraerán por tercer ejercicio consecutivo. En el primer caso, los datos del Ministerio de Hacienda prevén que se acometa un gasto del 5,8% del PIB. Para encontrar un dato tan reducido hay que remontarse hasta 2007, y la cifra está muy lejos del 6,7% de 2009. En cuanto a los fondos destinados a Educación, el esfuerzo se quedará en el 3,8%, que supone el nivel más bajo de los últimos 20 años y representa una cifra muy inferior al 4,6% que se registró en 2009.

Ante estos datos, Montoro siempre destaca que el gasto absoluto crece y que, por ejemplo, el desembolso total previsto para el conjunto de la **Administración Pública** pasará de los 476.543 millones de 2017 a los más de 490.000 millones presupuestados en los PGE. Y eso es cierto, ya que las partidas están compuestas por una mayor cantidad de dinero, pero también lo es que el desembolso crece por debajo de lo que lo hace la economía, algo que el ministro de Hacienda califica simplemente como una “moderación” y que está en línea con lo presentado a Bruselas.

“El crecimiento del gasto en el periodo de proyección, 2017-2018, queda por debajo del crecimiento del PIB nominal, aspecto en el que está jugando un papel fundamental la aplicación de la regla de gasto en todos los niveles de la administración”, explicó el Gobierno ya en octubre, a lo que añadió que preveía una disminución en las transferencias sociales “como consecuencia de una mayor eficiencia en el ámbito de los conciertos sanitarios y educativos, así como en el ámbito del gasto hospitalario y de la propia evolución de estos gastos”.

La “moderación”, explican desde Hacienda, es necesaria para que España consiga avanzar en el equilibrio de sus finanzas y cumpla con los objetivos de déficit. De hecho, los años en los que más recursos se destinaron a las partidas señaladas fueron los primeros de la crisis, en los que el déficit se desbocó y que suponen el origen de la actual contención.

Para 2018 el Gobierno sólo ha dejado esta tónica de contención a un lado en los salarios de los funcionarios y en las pensiones, una medida que tiene un marcado carácter político y que **Banco de España** ya ha señalado que dificultará la consecución del objetivo de déficit.

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado un incremento de la dotación para becas y ayudas al estudio de 50 millones de euros, hasta los 1.470,33 millones de euros. Sin embargo, en paralelo también ha congelado para 2018 el **Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem)**, índice que se utiliza como referencia para la concesión de estas ayudas, además de subvenciones o el subsidio por desempleo. Este indicador había subido un 1% en 2017. Así, el Iprem se mantendrá este año en 537,84 euros mensuales (6.454 euros al año en doce pagas) o 17,93 euros diarios. En aquellos supuestos en los que la referencia al **Salario Mínimo Interprofesional, SMI**, haya sido sustituida por el Iprem la cuantía anual del mismo se mantiene en 7.519,59 euros por catorce pagas o en 6.454 euros por doce pagas.

El Presupuesto para 2018 incluye también un incremento de la dotación para dependencia de 46 millones de euros. Sin embargo, este aumento se produce después de que el Gobierno haya admitido que las partidas para 2017 dejaron de ejecutarse en 44 millones de euros, con lo que el incremento real de las aportaciones del Estado a la dependencia son de dos millones respecto al Presupuesto del año anterior.

El gasto social en España, por debajo de la media europea

■ El gasto en protección social en los países de la Unión Europea ha crecido muy levemente desde 2010. Ha pasado de representar el 28,6% del PIB hace siete años al 29% en 2015, según los últimos datos difundidos por Eurostat. La oficina estadística europea explica que la mayor parte de los ingresos para financiar las prestaciones sociales procedían de las cotizaciones sociales, el 54%, y el resto de la recaudación de los impuestos de cada país. La estadística muestra grandes desigualdades

entre países. Mientras Francia destina el 34% de su PIB a pensiones, desempleo, prestaciones familiares y para la infancia, exclusión social y dependencia, Rumania o Lituania apenas destinan el 15% del PIB. España, por su parte, gasta el 24,7%, casi cinco puntos menos que la media europea. Todos los países de nuestro entorno invierten más en protección social. Hasta Portugal y Grecia, que han atravesado profundas crisis, destinan una mayor proporción de su PIB a estos gastos sociales. Dinamarca,

Bélgica, Países Bajos, Austria, Italia y Alemania gastan cerca de un tercio de su PIB. La situación de España no mejora ni al comparar el gasto en protección social per cápita (medido en paridad de poder de compra, que elimina la diferencia de los precios entre países). Según este indicador, España gasta unos 6.300 euros en paridad de poder de compra frente a los 10.800 euros que invierte Francia o los 8.200 de Italia. Según este criterio, Luxemburgo fue el que más gastó en protección

social (15.000 euros), seguido de Noruega y Dinamarca, que gastan casi 12.000 euros. “Estas disparidades reflejan diferencias en los niveles de vida, pero también muestran la diversidad de sistemas de protección y de estructuras demográficas, económicas, sociales e institucionales de cada Estado”, dice Eurostat. Otra de las partidas afectadas por la crisis es la sanidad. España vuelve a estar por debajo de la media de la Unión Europea que en esta ocasión se sitúa en un

7,2%, según los datos de 2014 de Eurostat. El escalón que ocupa España en ese sentido es el del 6,1% del PIB. Casi tres puntos por debajo de Dinamarca (8,7%), Finlandia (8,3%) y Francia (8,2%), los países que más dedican a la educación de la UE. Si tenemos en cuenta la evolución de la partida dedicada a sanidad, España tampoco sale bien parada. Y es que ésta ha bajado un 7,5% desde 2010, cuando entonces el gasto era de 6,6%. Porcentaje que también nos coloca por debajo de la media.